

Antonio Garcia de León

Encrucijada rural: el movimiento campesino ante las modernidades

En la década de los setentas algunos autores "descampesinistas" auguraban la extinción de los hombres del campo y su gloriosa resurrección en el cuerpo de un nuevo proletariado, y aunque esta predicción resultaba simplista o apresurada, hoy nadie duda de que en los ochentas hay ya una pérdida real de presencia del campesinado y del mundo rural en todos sus aspectos: tanto en la vida económica —por el efecto prolongado de la crisis más profunda de los últimos tiempos—, como en la propia imagen que el campesinado proyecta hacia las demás clases y grupos de la sociedad mexicana. Este deterioro se combina con un profundo reflujó del movimiento campesino, el mismo que habla vivido una época de extraordinario auge desde 1974, y conlleva —entre otras cosas— la ausencia de compromiso del Estado con el campo y la difusión de ideas cada vez más aceptadas acerca de la necesaria desaparición del ejido, de la ineficiencia primitiva del sector rural, etcétera.

Simultáneamente, las políticas de desarrollo rural que formaban parte integral de una situación surgida de la revolución de 1910, se han ido adelgazando casi con la misma rapidez con que se erosiona el Estado patrimonial y la legitimidad política de los últimos regímenes; mas comprometidos con las políticas del Banco Mundial que con cualquier "nostalgia populista" que se remita a la vieja revolución. Esto permite- la virtual cancelación de la reforma agraria, de los programas de salud y nutrición, de la inversión productiva rural y de que la autosuficiencia alimentaria se convierta en una antigua quimera, que habrá que tirar a la basura junto con la soberanía nacional.

Y en este fin de siglo dominado por las concepciones neoliberales, por el desmantelamiento de las fronteras para beneficio del gran capital, se vive también el abandono de los estudios, de la teorización y de los debates que sobre la realidad rural caracterizaron a los setentas. Desde que el sector agropecuario dejó de financiar a la sustitución de importaciones y de recibir la derrama de las últimas políticas estatistas (y de una acción oficial, como la del extinto SAM, que mal que bien pretendía la recuperación de una autosuficiencia perdida desde 1972), el campo dejó también de ser objeto de atención del debate académico y político, todo en el contexto de una severa crisis de la apreciación marxista y del acento que esta había puesto en la problemática de las clases sociales rurales. El panorama actual de la lucha campesina, una infinidad de frentes aislados en un océano de estupor y desbandada, orillada a la autodefensa por las políticas de choque instauradas con fuerza desde 1982, semeja el efecto de la pedrada sobre el hormiguero. La pregunta sería, ¿hasta que punto logrará reorganizarse y pasar a la ofensiva, antes de que todo su capital histórico y su capacidad de lucha terminen por consumirse?

CAMPESINOS EN UNA "ECONOMIA DE GUERRA"

La diferenciación del campesinado, un proceso de desigualdad creciente que acompañó a la paulatina conversión del país en una sociedad primordialmente urbana, y que fuera quizá el fenómeno mas visible y reseñado de los setentas (símbolo de nuestra entrada a la modernidad o de nuestro acceso al subdesarrollo, según como se lo quiera ver), proceso que permitía además la

búsqueda del sujeto revolucionario, ha sido totalmente rebasado por la profundidad de una crisis que no tiene precedente alguno y que se ha traducido ya en la virtual devastación del campo mexicano: como la de aquel enfermo al que le aplicaron tantas recetas que terminó victimado por una sobredosis.

La vieja discusión acerca del sujeto que debería encabezar las transformaciones en el campo, que animaba el auge organizativo de los productores rurales hace diez años, parece haber cedido lugar a apreciaciones pesimistas y a dudar incluso de la posibilidad de una transformación que tuviera como motor a cualquier factor de tipo interno. Los análisis más optimistas, los de aquellos que siempre vieron en la "economía campesina" la posibilidad de sustituir al "capitalismo", o que creyeron en un desarrollo autónomo basado en tecnologías propias,¹ hablan hoy de un escenario de guerra, para no hablar de un paisaje devastado, en el cual el campesinado tendría que oponer sus últimas fuerzas o asumir una "economía de guerra", quizás para no causar molestias innecesarias a un régimen empeñado en pagar a toda costa la deuda externa.² Y es que la "estrategia del desarrollo excluyente", característica de una política repudiada por la mayoría de los mexicanos en julio de 1988, no incluye a la generalidad de los productores rurales ni necesita su aval, aunque esta política tampoco manifiesta sus metas programadas, quizá para no erosionar más su escaso margen de maniobra. Así, la llamada "modernización", fantasma que ronda el país desde las reformas borbónicas del XVIII, es más conocida por sus efectos que por sus intenciones, y como todo referente ideológico dominante, viene acompañado de multitud de sinónimos que tienen como denominador común el ocultamiento del significado: reconversión, reordenación, ajuste, reestructuración, reorganización, desincorporación, reorientación, etcétera; y cuyos efectos más visibles en el campo se remiten en última instancia al acentuamiento de tendencias previas y ya visibles desde la década pasada: la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el crecimiento del abismo entre la agricultura capitalista y la de simple autosubsistencia y un ahondamiento de la diferenciación socioeconómica de los productores rurales que no tiene precedentes en la historia del país.³

Estas condiciones, que no dejarán de tener consecuencias sobre las bases de sustentación del sistema político, se hallan permanentemente "naturalizadas" por el discurso económico oficial (por lo demás, el único que se conoce a través de los grandes medios de difusión), y que consiste en hacernos creer que la "crisis" es algo así como una especie de catástrofe natural ante la cual el Estado asume una función protectora o mediadora. En todo caso, las tendencias del sector agropecuario no son únicas ni aisladas, e ilustran de manera poco original la forma como este país se inserta o se adecúa al nuevo concierto económico internacional, y en el cual el monto y la responsabilidad del manejo de la deuda se han analizado hasta la saciedad. A fin de cuentas, la forma actual del subdesarrollo mexicano se remite a una doble dependencia alimentaria, producto tanto de la brutalidad de la penetración de las relaciones mercantiles en el campo, como de la sustitución de los cultivos y de los patrones de consumo. La inversión de la relación entre ciudad y campo, la transformación drástica de países rurales en "urbanos" en proporción de 30 a 70% en las últimas dos décadas, resulta característica de muchos países que han sido subdesarrollados en condiciones parecidas a las nuestras.

Pero a pesar de que las intenciones no son claras, varias condiciones de la "carta de intención" firmada en febrero de 1988 por la SARH y el Banco Mundial, para "propiciar el desarrollo

1 Véase: Gustavo Esteva, "¿Y si los campesinos existen?", *Comercio Exterior*, vol. 28, n. 6, junio de 1978, pp. 699-713; Arturo Warman, "Desarrollo capitalista o campesino en el campo mexicano", *Comercio Exterior*, vol. 29, n. 4, abril de 1979, pp. 399-420; Veronika Bennholdt-Thomsen, *Campesinos: entre producción de subsistencia y de mercado*, CRIM, UNAM, México, 1988.

2 David Barkin, "La economía de guerra: una estrategia rural frente a la crisis". *Perfil de la Jornada*, 10 de abril de 1989, pp. 23-26.

3 Estos efectos se pueden ver en cifras en el artículo de Roberto Escalante y Teresa Rendón: "Neoliberalismo a la mexicana, su impacto sobre el sector agropecuario", *Problemas del Desarrollo*, n. 75, IIEG-UNAM, México, vol. XIX, octubre-diciembre de 1988, pp. 115-45

agropecuario en México", por 300 millones de dólares prometidos,⁴ se han cumplido ya con creces: reducción del papel de las empresas paraestatales (cierre prometido de quince de ellas y de seis ingenios azucareros), liberalización del comercio, liberación de precios, "correcto uso" de la inversión pública (lucha contra la corrupción, avalada nada menos que por el entonces titular del ramo, Eduardo Pesqueira Olea), "racionalización" y "desincorporación" de Conasupo (liquidación de Triconsa, cierre de tiendas, venta de empresas rentables, privatización de Impecsa, etcétera), privatización de la distribución de fertilizantes, y, en suma, control por parte del Banco Mundial de la política macroeconómica del sector agropecuario. Así, en 1988, se vendió por solo 300 millones de dólares prometidos y a una entidad internacional el diseño de toda la política económica para el sector rural: se ponía la mesa para que el régimen entrante pudiera "modernizar" el sector y continuar desarrollando los principales logros del "sexenio de la renovación moral".

Y es que un elemento nuevo en la actual crisis, al menos si la comparamos con otras anteriores (como la de 1929-32), es que ahora existe un patrón mucho más uniforme de sujeción de las economías capitalistas periféricas, así como políticas mucho más semejantes de "agentes" del gran capital financiero insertados en los gabinetes económicos de nuestros países. "El monto de la deuda y de su servicio", como apunta Pierre Salama, "obedecen hoy a factores que no son controlables por el poder político y cuya determinación se realiza en el extranjero".⁵ Se trata así no de una crisis cualquiera, e independientemente de sus efectos no previstos, conforma una política de austeridad para las mayorías que se propone conscientemente contraer la demanda interna para desviar una parte del excedente hacia el extranjero.

Esta política "popular y no populista", como ha sido definida por Carlos Salinas de Gortari ante algunos damnificados de la modernización (en un discurso en Chalco, México en octubre de 1989), se puede resumir en algunos rasgos ya cuantificados y en base a informaciones oficiales:⁶ crecimiento del desempleo y de la migración a las ciudades, deterioro de los precios agrícolas relativos, deterioro diferencial de la rentabilidad de la inversión productiva, declinación de la acumulación de capital agrícola, disminución del hato ganadero pese a la ganaderización extensiva del paisaje agrícola (disminución del 14%), disminución del parque de tractores, contracción del consumo interno de herramientas, fertilizantes, semillas y plaguicidas, caída del gasto público destinado al campo (cerca del 35%), desplome del crédito agrícola (40% en 1988 con respecto a 1981)... y que se refleja sobre todo por el aumento de la importación de granos básicos,⁷ la caída de los precios de garantía que hacen cada vez menos rentable a la agricultura y, sobre todo, la más drástica caída de los salarios de los jornaleros (del 40% entre 1982 y 1987), hechos todos que nos colocan en un grave horizonte de "reconversión negativa" orientada al mercado agroexportador.

Así, bajo esta concepción y en pocos años, estos últimos regímenes han logrado "modernizar" al campo con mucha más efectividad que la larga dictadura de Porfirio Díaz: los salarios de los peones rurales entre 1898 y 1910 solo disminuyeron 31.3%, y los de los obreros urbanos sólo 26%. Y en cuanto a la apertura comercial y a las facilidades al capital extranjero, José Ives

⁴ Banco Mundial, *Loan Agreement Sector*; inédito, 1988; citado por Escalante y Rendón, 1988, art. cit. p. 137.

⁵ Pierre Salama, "Privatización de la deuda del tercer mundo y socialización de sus consecuencias". *Cuadernos Políticos*, n. 43, abril-junio de 1985, pp. 28-38. Una comprobación involuntaria de esto (y de la cínica ignorancia del "gabinete agropecuario") puede verse en la entrevista hecha por Anne Marie Mergier al enriquecido ex-Secretario de Agricultura: "Del campo no existen ni estadísticas. El problema del campo, más grave que la deuda". *Proceso*, n. 654, 15 de mayo de 1989. pp. 6-12.

⁶ Véase: José Luis Calva, *Crisis agrícola y alimentaria, en México, 1982-1985*, Fontamara 54, México, 1988. Vale mencionar también algunas evaluaciones coyunturales, como la de Rosario Robles, "El campo y el pacto", *El Cotidiano*, 23, mayo-junio de 1983, pp. 65-72.

⁷ "Las importaciones de básicos alcanzaron 9.5 millones de toneladas en 1989 y, según se estima, un monto similar en 1990", Carlos Salinas de Gortari, *Primer Informe de Gobierno*, 1° de noviembre de 1989.

Limantour tenía todavía algunas nostalgias nacionalistas cuando en 1901 definiera la política económica de la mucha administración y poca política porfiriana;⁸ o al menos, la apertura al extranjero se concebía por decisión propia del gobierno mexicano.

La política moderna es antigua y esta nueva modernización de la miseria tiene también muchos referentes históricos: forma parte de una corriente continua, de un hilo conductor que aparece claramente en algunos momentos claves, en los cuales los requerimientos de integración del país al "concierto civilizado" son obra de ciertas burocracias. Curiosamente también, los afanes modernizadores —con toda su cauda de noción ilustrada, burguesa o positivista del progreso—, aparecen asociados en la historia de México a crisis agrícolas importantes, aun cuando en dos ocasiones anteriores fueron derrotados por revoluciones populares muy insignes. Así, las pretensiones restructuradoras de los Borbones se asociaron a las crisis agrícolas de fines del XVIII y principios del XIX⁹ y la reconversión porfiriana a la crisis de 1906.¹⁰ Porque quizás una característica de los vientos cíclicos de modernización oligárquica que de vez en vez azotan al país desde el siglo XVIII, sea el intento inútil de destruir las relaciones tradicionales, de acabar con nuestra incapacidad para la producción en serie, de matar los hábitos populares que traban nuestra integración a la división internacional del trabajo. Los "modernizadores" —de Gálvez a Limantour y de Alamán a Aspe— siempre pensaron la modernidad en términos de fin de la Historia: con la posibilidad de destruir todas las relaciones anteriores que obstaculizaran el convertirnos en una nueva Europa o en una segunda Norteamérica, algo sólo posible en la cabeza de quienes conciben lo moderno como antagónico a lo popular. Así, la dictadura de Díaz desapareció por decreto a la comunidad campesina, la misma que la barrió del escenario poco después, y creía posible construir un sistema económico de alta eficiencia y productividad, que si bien se equiparara al de los países del centro capitalista, *pudiera prescindir de la modernidad política y laboral*, dada la "incapacidad del pueblo para asumir la democracia".

La burbuja se rompió con la crisis de 1906 y con la revolución maderista, ese huracán que haría confluír cientos de revueltas aisladas y miles de motivaciones personales en un solo movimiento de salvación nacional, y cuya divisa antigua —el sufragio efectivo— se nos vuelve a acercar en esta nueva espiral de la historia.

La modernidad oligárquica resultaba así tan excluyente como la de hoy, una especie de forma elegante del atraso enfrentada en su momento a una modernidad diferente: la condensada en el proyecto de los grupos emergentes, proyecto colectivo de restauración de la República que podría basarse en las autonomías magonistas, en la defensa zapatista de la tierra, o en la lucha por el sufragio por la que Madero diera su vida.

El problema es actual y adquiere vigencia en este nuevo fin de época, de crisis generalizada modernidad para unos cuantos, cuando las alianzas que surgieron de una vieja revolución son molestas referencias para otros nostálgicos de una especie de modernización económica combinada con el atraso político, de quienes confunden de nuevo el avance con la dependencia, la producción a gran escala con la simple maquila, la recomposición industrial con la destrucción de las condiciones laborales y la democracia con el fraude y la "apertura" a cuentagotas, dosificada desde la intransigencia del poder. Un "nuevo plan modernizador nos convierte en traspatio de los imperios financieros, nos actualiza en el nuevo y bárbaro orden económico

8 Emilio Rabasa la llamó "política moderna" en su balance del porfiriato hecho en 1912: *La Constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización política en México*, reed. Ed. Porrúa, México, 1968. "Igual cosa debe hacerse con los capitales extranjeros", decía Limantour en 1901, "ofrecerles debemos el vastísimo campo que presentan nuestras inexploradas riquezas, y quiera Dios que no tarde mucho el día en que se lo disputen los capitales del exterior, ya sean americanos, ingleses o franceses [...] abriendo nuestras puertas al mundo entero, no por generosidad, sino por nuestro propio interés". (Mario Contreras, Jesús Tamayo, *Antología. México en el siglo XX. 1900-1913*, t.1, CELA, FFyL, UNAM, México, 1975, p. 171

9 Cf. Enrique Florescano, *Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810*, Ediciones Era, 1986; Enrique Florescano y Victoria San Vicente, *Fuentes para la historia de las crisis agrícolas (1809-1811)*, UNAM, 1985.

10 John H. Coatsworth, "Anotaciones sobre la producción de alimentos durante el porfiriato", *Historia Mexicana*, vol. xxvi, n. 2, octubre-diciembre de 1976, pp. 167-87.

internacional y sigue preservando en lo político las formas más atrasadas del control corporativo y caciquil, la monopolización anacrónica y autoritaria de los medios, el uso faccioso de los recuerdos del país y el mantenimiento de la dictadura del partido de Estado. La integración silenciosa al mercado común norteamericano implica así un proyecto no declarado y vergonzante; el que a diferencia del europeo, nos condenaría a mantener en México una relación salarial desventajosa (la actual, de 10 a 1) con los Estados Unidos y Canadá. La modernización salinista, jamás aprobada ni puesta sobre la mesa, oculta en la retórica retorcida del Plan Nacional de Desarrollo, se resume en convertirnos en simple reserva de mano de obra barata del polo desarrollado del mercado común norteamericano. Una meta difícil cuando se exijan salarios equiparados y derechos políticos modernos, como los de esos países. La visión oligárquica sigue cojeando de ese pie y tratando de refugiarse en el esquema bipartidista de derecha recomendado desde la Casa Blanca, enfrentado de nuevo, como en los albores de 1910, a sus propias contradicciones y al otro proyecto modernizador, al nuevo bloque histórico que habrá de sustituirlo.

El movimiento campesino mientras tanto sigue reclamándole al Estado el abandono de la vieja alianza. Desde el "organizado" en el PRI hasta las formaciones más independientes se duelen de haber llegado tarde a los tutelajes del Estado patrimonial, se niegan a entender que la alianza de los campesinos con el Estado es cosa del pasado y que asistimos al inicio de otra fase. Los promotores de la revolución campesina de los setentas están ahora a ambos lados del escritorio, unos como funcionarios y otros como gestores de la "concertación social" en el seno de las organizaciones campesinas: el sujeto transformador de la sociedad mexicana se amplió y se desplazó a otros espacios. La dispersión campesina es sin embargo uno de los escasos puntales "populares" de la modernización neoliberal, pues si bien es cierto que la mecánica del capitalismo salvaje genera resistencias episódicas, la realidad salarial, la desmovilización y la nueva cultura de lo estricto necesario tienen un particular arraigo en el campo atrasado y han llevado a una situación de "austeridad autoasumida", a un derrotismo estructural alimentado por sesenta años de despolitización, a una estrechez autocontenida que nos permitirá —según sus promotores— salir de la crisis a través de la "economía de guerra", de las dietas macrobióticas, de las proteínas contenidas en las lombrices, de la medicina herbolaria, del retorno a la Naturaleza (allí donde la desnudez y la miseria se confunden). No olvidemos que esta ideología de la supervivencia, uno de los aspectos más crudos de la crisis, ha penetrado profundamente la política y las prácticas de un movimiento campesino estancado y que el principal caldo de cultivo de las arcaicas prácticas priístas está en el campo.

LOS SIGNOS DE LA RETIRADA: POLVOS DE AQUELLOS LODOS

Después de un notable y muy reseñado auge, de un poderoso impulso que ocurre desde principios de los años setenta, y que coincide con el fin de la autosuficiencia alimentaria, con los estertores finales del llamado desarrollo estabilizador y con la inserción de muchos sobrevivientes del 1968 en las luchas campesinas —años de movilizaciones y furor organizativo sólo comparables a los de los tiempos inmediatamente posteriores a la revolución—,¹¹ el movimiento campesino vive desde 1985 una etapa de reflujo que apenas hoy empieza a reconocerse en sus rasgos más generales.¹² Y a pesar del enorme costo social que estas movilizaciones significaron, del altísimo precio pagado en sangre, quizás hoy podamos decir que

11 Véanse principalmente los ensayos de Armando Bartra: "Crisis agraria y movimiento campesino en los setentas", *Cuadernos Agrarios*, n. 10-11, diciembre de 1980, pp. 15-64; *Notas sobre la cuestión campesina (México 1970-1976)*, Ed. Macehual, México, 1979, y *Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México*, Ediciones Era, 1985. Una valiosa evaluación hasta 1984 es la de Graciela Flores, Luisa Paré y Sergio Sarmiento: *Las noches del campo: movimiento campesino y política agraria, 1976-1984*. Siglo XXI Editores, 1988; por rilar sólo algunos.

12 Adriana López Monjardín, "1982-88: un proyectó anticampesino y antinacional", *Cuadernos Políticos*, n. 53, pp. 19-33, enero-abril de 1988. Véase también el balance "Avanzar después de las derrotas (lera, parte)", *Punto Crítico*, n. 167, octubre de 1989, pp. 28-30.

el periodo de auge constituyó una forma de reacomodo de la relación entre el movimiento y el Estado; un proceso demorado en el que algunos creyeron ver la antesala de la revolución y que quizás sólo constituía una forma *sui generis* de readaptación de las relaciones entre un sector de los productores rurales —aquellos que no alcanzaron los beneficios de la alianza de la revolución— y un Estado que abandonaba rápidamente las políticas de bienestar, en un país en donde la "alianza del Estado y los campesinos" adquirió tintes corporativos de muy larga duración, rasgos que de seguro tardarán mucho en dispersarse a pesar de la disolución del consenso priísta en sectores más modernos de la sociedad.¹³

El arribo a esta situación explica la dispersión de los objetivos campesinos y la pérdida paulatina de la relativa independencia de clase que el movimiento parecía haber alcanzado. Una evidencia reciente de este *impasse*, trágica en tanto sucede después de los acontecimientos electorales de 1988, es la reunión del Congreso Agrario Permanente en la ciudad de Cuautla, Morelos, el 10 de abril de 1989. Allí, en un escenario preparado de antemano por la virtual ocupación militar de la ciudad, las organizaciones independientes y oficiales desfilaron ante Salinas de Gortari para plantear todas sus demandas, legitimando "la tolerancia ante la crítica" de un régimen que no cuenta con el aval de las urnas y que en su corto haber tiene ya varios asesinatos de líderes campesinos. Triste, porque la misma tarde del 10 de abril y frente a la capilla del Señor del Pueblo, en la plaza en donde yacen los restos de Emiliano Zapata, una manifestación opositora, de electores burlados y muchos de ellos campesinos, se realizaba con enormes esfuerzos de organización mientras los autobuses de acarreados de la CNC, del Movimiento de los 400 Pueblos y de la CCI priístas, pero también de la CIOAC, de la UNORCA, de la UGOCP y de la CNPA, abandonaban Cuautla de regreso a sus lugares de origen. Un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, enmarcado por una celebración oficial que allí lograba aglutinar de nuevo a las ovejas descarriadas en los setentas: en una amplia coalición campesina hegemonizada por la CNC y tutelada por un régimen que ha dado suficientes muestras de su vocación anticampesina.

Los largos años de movilización, de esfuerzo organizativo, de intensa represión (solamente en el sexenio de Miguel de la Madrid se reportaron ochocientos asesinados por razones agrarias) estuvieron quizás ayunos de una educación política sólida, de una sistematización de la propia experiencia, la que reflejaba por sí sola la naturaleza del Estado, el origen histórico y la crisis demorada del "bonapartismo mexicano", así como la más reciente política económica y de "concertación". Y es que el estupor campesino y la falta de adecuación ante las nuevas condiciones, permitieron que el Estado pudiera penetrar enormes sectores del movimiento, desviando sus metas a mediano y largo plazo y favoreciendo los enfrentamientos internos y la dispersión. De otra manera no se puede explicar un hecho innegable: la imposición sistemática de un proyecto anticampesino y de una política que ha golpeado incluso a organizaciones incondicionales del gobierno, y ante la cual el movimiento ha respondido de manera dispersa, fragmentaria y recurriendo a tácticas de "presión" y reconocimiento que, en el mejor de los casos, sólo conducen a endebles acuerdos regionales de corto plazo. La política de "modernización del sector rural" avanza así de manera incontenible, mientras las organizaciones independientes adoptan posiciones triunfalistas y negocian en base a promesas incumplidas y en condiciones de extrema debilidad. El desgaste paulatino de las tácticas de lucha (marchas, plantones, huelgas de hambre) ha conducido a situaciones confusas y absurdas (como las recurrentes huelgas de hambre llevadas a cabo por la oficialista Confederación Nacional de Pueblos Indios: para lograr periódicas entrevistas con el Jefe del Ejecutivo). Lo que queda del movimiento campesino independiente abandona la acción cotidiana en el campo y entre sus bases y se refugia en las cúpulas, en acuerdos de gestores que "concertan" en oficinas de segundo rango, en clientelas dirigidas por nuevos caciques, y se refleja deformado en el universo de los desplegados de prensa (que los campesinos ni siquiera leen).

Por otra parte, los acontecimientos de 1988, al menos en la franja central del país, afectaron a los campesinos en su participación civil y política, pero no sectorial, dándose así una situación de doble militancia en las organizaciones sociales existentes y en las que se formaban para la defensa del voto. Las primeras se aferraban a las condiciones anteriores, mientras sus agremiados —que, dicho sea de paso, constituyen una minoría de los productores rurales— se volcaban

13 Hay quien incluso ha llegado a plantear que el campesinado en México es producto histórico directo de esa alianza: véase Roger Bartra, "Y si los campesinos se extinguen...", en: *Campesinado y poder político en México*, Ediciones Era, 1982, pp. 42-56.

masivamente al emergente movimiento social cardenista junto con la mayoría de los no afiliados a ninguna organización formal.

El movimiento campesino organizado, y me refiero aquí al conjunto de las organizaciones oficiales e independientes, parecía pues haber avanzado ya demasiado por el mismo camino de los partidos políticos, aunque quizás un poco más lejos: participando cada vez más oportunistamente en un escenario en el cual no se cuestionaba la necesaria hegemonía del PRI, y en donde sólo se negociaba el reparto de algunas migajas presupuestales y "cargos de representación popular". La inesperada coyuntura de 1988 trastocó sin embargo todos los elementos de ese juego, desde el momento en que el polo central de atracción era profundamente erosionado por razones totalmente ajenas al movimiento campesino. Las brújulas de éste enloquecieron, al menos entre julio y diciembre de 1988, y en algunas regiones el relámpago puso al descubierto viejos conceptos que seguían latentes y arraigados en el campesinado, y que sordamente la crisis rural y la política agropecuaria habían alimentado, y que se condensaban en la ilegitimidad histórica del "mal gobierno".¹⁴ A pesar de que algunas acciones represivas afectaron a las organizaciones, esto no impidió un cómodo retorno de las cúpulas a la situación anterior: todos tendríamos que olvidar los molestos acontecimientos de 1988.

La ilegitimidad de origen del régimen salinista, que trata de ser borrada por una intensa y cara campaña propagandística, se olvida más difícilmente en el campo (la agresión informativa se expande más lentamente) y es todavía una enorme piedra en el zapato, y no sólo del régimen y de todos los medios de comunicación a su exclusivo servicio, sino también en el de quienes habían ya elegido el camino de la "minoría concertadora" y de aceptar las migajas presupuestales y el escasísimo margen de maniobra sin cuestionar en absoluto la naturaleza del *proyecto desnacionalizador*, el más poderoso y agresivo que ha padecido el país desde el porfiriato.

La crisis del movimiento conforma ya una grave situación y lo coloca en situaciones de extrema debilidad, en una correlación de fuerzas muy desfavorable y difícilmente reversible; a tal punto que, como se diría en un comentario reciente¹⁵, ya no basta con la simple unidad de todas las fuerzas realmente existentes:

[...] Aunque la unificación de las organizaciones campesinas independientes pudiera darse, tal vez no se estuviera atacando el problema de fondo; tal vez se estarían sumando, simplemente, fuerzas golpeadas y debilitadas y proyectos muy poco exitosos. Un breve recuento de las principales fuerzas independientes en el campo, vistas a la luz de la situación que prevalece entre los contingentes sociales a los que cada una de ellas se propuso representar de manera prioritaria, confirma la idea de que han fracasado los proyectos que le dieron vida, y de que no basta con sumarlas para afrontar la crisis del movimiento campesino.

Y en estas condiciones varios desarrollos se pueden ver y ubicar, y el hacerlo quizás ayudaría a un diagnóstico de la enfermedad:

1. Un *clientismo extremo* y excluyente, que nos demuestra que la cultura priísta, producto de varias décadas de control y despolitización, no es exclusiva del partido oficial, pues brota por muchos intersticios del tejido social. Las organizaciones trabajan así prioritariamente para sus propios agremiados y sus éxitos se miden con la vara de las "ventajas" obtenidas por sus asesores y negociadores, que se adaptan a los diferentes estilos de "concertación".

¹⁴ La forma como se impuso al candidato oficial revivió viejas memorias de antiguas usurpaciones, añejas ilegitimidades y antiqüísimos fantasmas populares. Un veterano zapatista del sur de Morelos nos relató, en octubre de 1988, la forma como los "gachupines" se habían apoderado del gobierno desde José López Portillo y cómo ahora imponían a "Huertari".

¹⁵ *Punto Crítico*, cit., p. 29. Sobre la "unidad campesina" en el Congreso Agrario Permanente y a la espera de que el gobierno cambie su política hacia el campo, véanse las recientes declaraciones de José Luis Hernández, de la dirección nacional de la CIOAC ("Aun hay tierra por repartir, afirma el líder de la CIOAC", *La Jornada*, 4 de noviembre de 1989, p. 9): "añadió que el Jefe del Ejecutivo [en el Informe] no hizo referencia alguna al Congreso Agrario Permanente (CAP). Esa instancia, dijo Hernández, debe servir como entidad plural del movimiento campesino para que desde su seno se elaboren propuestas colectivas de política agraria [...] 'Si el Presidente pensaba que el CAP sería un grupo subordinado que respaldara las políticas gubernamentales se equivocó definitivamente', aseguró"

2. La *austeridad autoasumida y aceptada* permea a las organizaciones que dieron prioridad a los aspectos económicos y a mejorar las condiciones inmediatas de sus agremiados, en circunstancias generales muy desfavorables (sobre todo desde 1982); y que al carecer de una clara y definida orientación política, o ser incluso controladas por facciones del propio Estado (como *Línea Proletaria* a fines de los años setenta), lograron constituir a veces exitosas uniones de ejidos o cooperativas de productores a costa de su propia independencia. Agrupados después en frentes amplios, como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), en la que participan a nivel de dirección incluso funcionarios del gabinete agropecuario y dirigentes de la Central Nacional Campesina,¹⁶ han producido buenos gestores y un reducido peso en la definición de las políticas a seguir, a pesar de su línea oficialista. Muchas de sus organizaciones convocantes han perdido fuerza regional por el cada vez más escaso apoyo oficial o por el auxilio económico de fundaciones caritativas europeas y norteamericanas. En aras de la "independencia del campesinado" han cuestionado la participación de sus afiliados en el "cardenismo", mientras legitiman el proyecto neoliberal del gobierno (en tanto figura "natural" y "más allá de la política" o en tanto "ente eterno" más allá de la política al alcance de "sus" masas). La caída de los precios agrícolas nacionales e internacionales (como el del café) y la destrucción de la industria azucarera ponen en grave riesgo a estos grupos económicos.

3. La *sobreideologización* y el *sectarismo* se sitúan aparentemente al lado opuesto del economicismo, y se basan en una caracterización maniquea, excluyente y esquemática del entorno social, en donde los análisis de clase de la década pasada siguen circulando no sin cierto desgaste y a pesar de las nuevas realidades. Del sectarismo marginal y de la intoxicación teórica se ha pasado en los últimos años a la intolerancia y la disolución interna. Las sanciones, las expulsiones y las mutuas recriminaciones ocuparon tanto espacio en coaliciones tan amplias como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que el impulso popular del 88 pasó de largo y no fue nunca apreciado como una posibilidad de avance organizativo y de lograr una unidad del campesinado más independiente con respecto al Estado. Los retazos de una añeja e inconsecuente teorización maoísta permitían caracterizar el auge civil como un movimiento "reformista" más. A pesar de la prédica antipartidaria realizada en sus propias filas (y apoyada en verdades a medias sobre la cooptación de los partidos políticos), muchos miembros de sus organizaciones regionales se integraron individualmente al movimiento democratizador. En todo caso, al sistema político dominante le beneficia la existencia de organizaciones "radicales" que mantengan a los campesinos alejados de la participación electoral, lo que objetivamente permite la manipulación arcaica del voto.¹⁷

4. El *regionalismo extremo* condujo a otros a evitar las alianzas nacionales, a apoyarse a veces en las luchas municipales aisladas y cayendo más bien, o recreando a escala microsocial, el escenario electoral anterior a 1988, tan caro al partido oficial. Un ejemplo lo constituyen algunos sectores de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en los estados de Guerrero y Morelos, empeñados en formar "grupos de autodefensa" o "coordinadoras municipales", que en algunos casos son ya comités de base del PRI y han logrado democratizar el dedazo en lo que respecta a la selección de candidatos municipales oficiales. Otro ejemplo de estos grupos regionales de origen radical que han optado por penetrar la fortaleza oficial, o subirse a la aplanadora, es el Comité de Defensa Popular de Durango,

5. El *realismo* obligó a otros a abandonar incluso sus propias y originales concepciones de lucha y lecturas de la realidad; posturas que eran apoyadas en procesos visibles en la realidad de los setentas y que obligaban a tácticas específicas y a la lucha por demandas elementales: como la

¹⁶ Como Hugo Andrés Araujo y Gustavo Gordillo: véase, "Acción unitaria del movimiento campesino, II Encuentro nacional de la UNORCA, 18, 19 y 20 de agosto de 1988", Perfil de la *Jornada*, 26 de agosto de 1988. Destaca su independencia con respecto a los partidos, pues su "ámbito es la política social, es decir la política que tiende al bienestar económico y social de los campesinos y a conformar al campesinado como fuerza social autónoma". Los documentos usan la palabra "concertación" con varios significados.

¹⁷ Un ejemplo del sectarismo "antielectorero" lo ofrecen organizaciones como la Unidad Popular Cañera (UPC) del sur de Morelos, que pretendió incluso expulsar a sus miembros "cardenistas"; o la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de Chiapas, virtualmente liquidada por un enfrentamiento entre dos acciones, por la expulsión de una de ellas de la CNPA y por un proceso de desgaste que la colocó en los últimos meses en condiciones de extrema vulnerabilidad: a tal grado, que el asesinato en marzo de 1989 del dirigente Arturo Albores por un matón a sueldo de los finqueros pudo manejarse en la prensa local y nacional, y por el gobierno estatal, como un "arreglo de cuentas" interno. El solo hecho de que esta posibilidad pudo haber sido manejada, habla por sí mismo del grado de erosión de una organización que había alcanzado bastante arraigo y prestigio.

sindicalización de los jornaleros agrícolas, algo muy difícil en México a pesar de la Constitución de 1917. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que surge en la década pasada como tal del seno de la Central Campesina Independiente Revolucionaria, heredera directa de las concepciones de la Tercera Internacional y del Partido Comunista Mexicano, y que en sus propias siglas y demandas iniciales trataba de salirle al paso a la proletarización promoviendo los sindicatos rurales (en enclaves agroexportadores del norte y reductos semiserviles del sur), abandonó poco a poco esta orientación para convertirse, de manera realista, en una organización de corte economicista y de gestoría agrarista, en una coalición de pequeños bancos rurales que han ayudado a paliar la crisis en muy pequeños entornos pero a un costo político muy alto: asesinato de muchos de sus dirigentes y que la sindicalización rural siga siendo una necesidad insoslayable, que la lucha por los derechos laborales en el campo siga equivaliendo a una sentencia a muerte. Esta evolución por colocarse en espacios que le permitieran la negociación hizo que en algunas regiones del país la CIOAC se mantuviera al margen de la movilización del 88, o incluso en contra de ella, a pesar de su vinculación con el Partido Mexicano Socialista: el caso de Chiapas resulta otra vez aleccionador, pues allí la CIOAC llama, poco antes de aquel 6 de julio, a que sus afiliados voten por "el partido que deseen", en un contexto previo de "concertación" con el gobernador entrante Patricio González Garrido. El trabajo de organizaciones como la CIOAC y la OCEZ permite que Chiapas sea uno de los estados que se mantienen en julio de 1988 en condiciones atrasadas y que el candidato oficial logre allí un triunfo inobjetable. El realismo político de la CIOAC no la salva sin embargo de seguir siendo, junto con la OCEZ, la organización más reprimida de Chiapas: ¿en qué consiste pues la ventaja de negociar y concertar a la defensiva?

6. El *oportunismo* puro y simple parece caracterizar no solamente a las dirigencias, y el realismo —aquí mucho más justificado— se filtra hasta la base de muchos grupos campesinos, a veces demasiado organizados y manoseados, penetrados hasta la médula de una nueva faceta del viejo corporativismo priísta, justo en ese medio rural en donde todavía el PRI puede "ganar" las elecciones. Y allí en donde las organizaciones independientes han abierto el abanico de las posibilidades de participación (que va desde la CNC hasta las más radicalizadas, pasando por las uniones de crédito, uniones de ejidos, uniones de uniones y diversos grupos), es en donde los campesinos en lo individual, o como ejidos o comunidades, o aun como fracciones clientelares, reproducen de otra manera las viejas lealtades primordiales, las que a veces pasan inadvertidas para los "asesores" venidos de fuera o de la ciudad. Estos grupos pueden dar virajes excepcionales o participar al mismo tiempo de organizaciones de muy diverso signo: la simple *sobrevivencia* a que los ha obligado la "economía de guerra" justifica todo, como en partes de la Huasteca, Chiapas, Oaxaca, Morelos y otros estados en donde los campesinos alternan sus compromisos o coleccionan credenciales de todo tipo para obtener créditos, mejores precios, ventajas individuales o colectivas...

El oportunismo mercenario sigue siendo sin embargo exclusividad de dirigencias que ni siquiera son campesinas. El caso más reciente es la constitución, el 10 de abril de 1988 en Xochimilco, de la efímera Central Campesina Cardenista (CCC) por los líderes del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tratando de aprovechar para su beneficio y el del gobierno, el auge civil de 1988. La "reincorporación" del PFCRN al partido oficial y el burdo acarreo hecho por Amador Amador de algunos campesinos de La Laguna al despacho de Salinas, cortaron la existencia de este membrete, pero lograron un objetivo: generar la confusión, justificar el realismo de los "puros" e impedir la formación de una coalición campesina democrática e independiente ligada al movimiento social del 88; a fin de cuentas la palabra "cardenismo" podía significar también muchas cosas.¹⁸

En fin, hemos dicho que los promotores de la insurgencia campesina de los setentas están a ambos lados del escritorio, en polos opuestos de la "concertación social": se trata de los que aún viven, porque muchos han sido asesinados, encarcelados o desaparecidos, pues la represión sigue siendo y a pesar de todo la cara oculta de la concertación y la permanente amenaza contra todas las organizaciones que de manera coyuntural o general defiendan los intereses de sus afiliados (incluyendo por supuesto a la misma CMC cuando defiende precios de garantía, demandas de dotación, etcétera). De los años setenta para acá la violencia institucional se fue especializando y

¹⁸ Cuando en Cuautla, otra vez, se propone el 8 de agosto la creación de un frente democrático campesino, organizaciones como la UGOCF, cercana al Partido Revolucionario de los Trabajadores, se dan el lujo de no asistir arguyendo que se trata de algo demasiado "cardenista" (aunque participa, críticamente, en los acarreos del CAP que legitiman a Salinas).

diversificando. Hoy se puede decir *a grosso modo* que al inicio del auge social campesino, en tiempos de Echeverría y López Portillo, el ejército era el principal ejecutor de las órdenes de desalojo y de la persecución, asesinato y desaparición de bases y dirigencias (y muchos informes así lo confirman). La misión represiva se desincorporó y modernizó un tanto y fue después obra de corporaciones policíacas y grupos paramilitares, y aun de "organizaciones campesinas", como la llamada Antorcha Campesina, un grupo de corte paramilitar y "lenguaje de izquierda" que surge en Puebla y que hoy actúa en diferentes estados del país (con el apoyo y encubrimiento del sistema rural de tiendas Conasupo, sobre todo en tiempos de Raúl Salinas de Gortari, que —por otro lado— impulsa la "concertación".¹⁹ El signo actual parece estar conformado, y pese a una política de "amnistía" muy administrada, selectiva y propagandizada, por la represión selectiva, por la eliminación física de activistas y dirigentes señalados (los impulsores del "todo o nada"), dentro de un esquema de contingencia social y *seguridad nacional* que no ha dejado de llamar la atención de entidades como Amnistía Internacional en sus últimos reportes sobre México.

LAS PERSPECTIVAS A FUTURO

En suma, muchas cosas han sucedido, o plantean nuevos y muy diferentes retos a un campesinado que, pese a toda su dispersión social y política, es una amplia y compacta franja de la sociedad, un sector paradójicamente igualado y unificado por las políticas de choque que han empobrecido diferencialmente a campesinos ricos, medios y pobres, a jornaleros y a un importante sector de la misma burguesía rural: desplazada por las corporaciones transnacionales que hoy controlan la producción, la comercialización y el consumo de los productos del campo, golpeada por la apertura al GATT y la libre importación.²⁰ Debido a esas nuevas circunstancias económicas, y a otras ocurridas en lo social y lo político, el propio régimen declara ya con bastante prisa y certeza la cancelación de la reforma agraria, en su aspecto de reparto de tierras,²¹ y la puesta en marcha de nuevos operativos de "modernización"; mientras muchas organizaciones se aferran a seguir mendigando el simple reparto dosificado, que lleva ya setenta años de desgaste. O dicho de otra manera, cuando la simple demanda por la tierra (justa y necesaria en amplias regiones del país) resulta rebasada y es un protagonista secundario ante el hundimiento generalizado del sector. Ante todo eso, el movimiento se replegó a las pequeñas y aisladas trincheras, y al hacerlo optó por instalarse en el terreno de la política de la nueva derecha hegemónica, la *política del pequeño arreglo*; la que, como asegura un antiguo teórico del mundo rural, ha sustituido los Grandes Problemas Nacionales por los Pequeños Problemas Parroquiales²², la política de "ausentarse de la política". Y mientras más se acerca y más cede, menos distingue las intenciones de su viejo benefactor y enemigo. Y es que antes de 1988 lo político no era objeto de discusión, estaba relegado o "se tenía claro", mientras el movimiento se instalaba cómodamente en el sillón de la minoría opositora, destinado con un atavismo derrotista endémico, a *presionar* a un régimen de consenso inobjetable, situándose poco a poco a la defensiva y dilapidando su capital de lucha. O para decirlo con otras palabras, cuando el *máximo objetivo del movimiento ha sido disputar a las organizaciones oficiales el monopolio de la*

¹⁹ Véase el estudio apoyado por la Fundación Ford y la Gerencia Corporativa de Evaluación del sistema de Distribuidores Conasupo-Diconsa, de Miguel Székely y Miguel Lanz H., *Acerca de algunas prácticas concernientes a la problemática de la concertación social*, Taller de Concertación Social, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, octubre de 1985.

²⁰ De acuerdo a las condiciones impuestas en 1988: véase nota 4 y el documento confidencial al hecho público por *La Jornada* el 6 de noviembre de 1989: "El Banco Mundial sugirió la reestructuración de Conasupo", pp. 1-8.

²¹ Salinas de Gortari lo expresa por primera vez abiertamente en su Primer Informe (lo. de noviembre de 1989): "El reparto masivo de tierra ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo a los casi dos millones de solicitantes de tierra y a los más de cuatro millones de jornaleros agrícolas."

²² "Entramos, dice Roger Bartra, [...] a un mundo en donde la política se descompone en planos distintos y se negocia con grupos de interés restringido. Las nuevas relaciones con el Vaticano se concertan con la jerarquía eclesiástica, el manejo de la deuda externa con los grandes empresarios, los mecanismos electorales con la cúpula de algunos partidos, la contaminación con ciertos grupos de presión, etcétera. El conjunto de pactos es un galimatías incoherente, pero hay una lógica postmoderna oculta que está operando con el objeto de generar nuevas formas de legitimidad que no impliquen la caída del régimen priista y que desmovilicen a la oposición. De esta forma el gobierno mexicano se aboca al diálogo y a la concertación siempre y cuando no conduzcan a un gran pacto para la transición a la democracia, similar al acuerdo global que en España condujo a una ruptura con el régimen franquista. Pequeños acuerdos, sí; pero no un gran acuerdo nacional para transitar a la democracia. Parece operar aquella consigna popular en los medios conservadores norteamericanos de los años setenta: *small is beautiful*" (R. Bartra, "Hacia una sociedad postdemocrática", *La Jornada Semanal*, nva. época, n. 25, 3 de diciembre de 1989, p. 25).

*representación de los campesinos ante el Estado.*²³

La situación no se ha movido lo suficiente como para hacer salir al movimiento de su *impasse*, pues una vez que los polvos de la agitación electoral parecían apaciguarse, y de que el gobierno entrante recuperaba poco a poco su imagen, la mayoría de las organizaciones campesinas volvían a lo suyo, y en esto coincidían plenamente con un gobierno pujando por recuperar consenso y por negociar en condiciones ventajosas. Así, la creación del CAP representó, más que un avance de la necesaria unidad e independencia, un golpe más a las expectativas de movilización civil, la que no cesa de manifestarse en otros sectores productivos y sociales. El CAP es ahora uno de los principales soportes que el régimen tiene para construir el escenario político anterior a 1988, para implementar a fondo la modernización oligárquica "con aval popular": situación ambigua dado que muchos militantes de base de organizaciones adheridas al CAP continúan movilizados en contra de la antidemocracia o del mismo trato diferencial y discriminatorio que reciben los "independientes" dentro de esta coalición. Todo en un juego múltiple que ha agudizado la dispersión, la confusión, el desencanto y la disolución de los objetivos sectoriales del movimiento, dándole en esto un respiro a la administración y al conjunto de la política económica.

Por si fuera poco, el movimiento representa además una gama de demandas aisladas y regionalizadas, en donde se articulan las más antiguas (como la de la tierra, la de la sindicalización rural, y aun la de la desaparición de las relaciones de servidumbre), con otras surgidas del trato con el Estado, producto del cambio de política; o de otras más nuevas que trascienden el fin de milenio (como la simple lucha de supervivencia ante la destrucción física del medio ambiente). En fin, todas demandas aisladas que el gobierno y la clase dominante pueden enfrentar aisladamente y en negociaciones de escritorio a espaldas de los campesinos.

Hoy, la mayor parte de los productores rurales son ya concebidos como beneficiarios del Programa Nacional de Solidaridad (una especie de institución caritativa que demuestra las bondades del neoliberalismo a la mexicana) o se les exige de impuestos en un arranque neopopulista de los administradores. Y si bien es innegable que los rescoldos aun organizados perduran dispersos por todo el país; éstos tienen que atender a retos cada vez más gigantescos, reordenar todas sus tácticas y saber que la única clave de su recuperación está necesariamente en lo político, en recuperar su identidad y su independencia de clase. Un difícil viraje, al que de seguro se opondrán no sólo sus tradicionales enemigos, sino también las burocracias de centro y de izquierda, las "cúpulas concertadoras" y gestoras que el propio movimiento ha generado, y que hoy son ya representación del Estado en su propio seno.

Si este viraje no ocurre, pronto despertaremos con una de las pocas noticias que nos falta escuchar: de que el ejido ha sido declarado fuera de la ley y en subasta pública, las tierras comunales objeto de museo y los campesinos extinguidos por decreto; pues el actual proyecto no puede concebirse sin *zonas de alta productividad*, centradas en la propiedad privada —de preferencia extranjera— y necesariamente rodeadas de océanos de miseria campesina

Quizás haya que esperar otra vuelta de tuerca y una agudización de la crisis de legitimidad para que el movimiento recupere todo lo que ha perdido en el camino, y se sume de una vez por todas al conjunto del variado movimiento social que hoy prefigura una nueva hegemonía: o la situación evolucione más, hasta colocarnos de plano ante la evidencia de que tenían razón quienes hace pocos años preveían la extinción del campesinado.

Diciembre de 1989

²³ "El mayor logro del movimiento hasta ahora es por una parte su avance en la coordinación nacional y, por otra, la lenta erosión del aparato corporativo que implica disputarle a las organizaciones oficiales el monopolio de la representación del campesinado"; dicen en 1984 Flores, Paré y Sarmiento: *op. cit.*, 1988, p. 225.